

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO SUR DE NUEVA YORK

LATIN EVENTS LLC,
Demandante

25-cv-2830 (PKC)

En contra de

ORDEN

JUNTA CENTRAL ELECTORAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Demandado

CASTEL, U.S.D.J.

La demandante, Latin Events LLC ("Latin Events"), solicita el dictado de sentencia en rebeldía contra la demandada, Junta Central Electoral de la República Dominicana ("JCE"), de conformidad con la Regla Fed. R. Civ. P. y la Regla Civil Local 55.2.

Latin Events inició esta acción al presentar una demanda el 4 de abril de 2025 (ECF 1). Presentó una declaración jurada de notificación que refleja que Gladys "Doe" aceptó personalmente la notificación en nombre de la demandada en su oficina ubicada en 1501 Broadway, Manhattan (ECF 8). La JCE no ha contestado ni comparecido. El Secretario del Tribunal emitió un Certificado de Rebeldía contra la JCE el 29 de octubre de 2025 (ECF 32).

La Regla 55(a) del Reglamento Federal de Procedimiento Civil (Fed. R. Civ. P.) establece que se puede dictar sentencia en rebeldía cuando una parte no ha presentado alegaciones ni se ha "defender de otro modo". "Una rebeldía es una admisión de todas las alegaciones bien argumentadas contra la parte incumplidora". D.H. Blair & Co. contra Gottdiener 462 F.3d 95, 107 (2d Cir. 2006) (se omiten las comillas). Sin embargo, "la decisión de un tribunal de dictar sentencia en rebeldía contra los demandados no da derecho, por definición, a los demandantes a que se dicte una sentencia en rebeldía".

Albañiles y Artesanos Afines Local 2, Albany, Fondo de Pensiones de Nueva York
contra Moulton Masonry & Construction. LLC, 779 F.3d 182, 187 (2.º Cir. 2015)



dictar sentencia en rebeldía, un tribunal de distrito debe determinar si las alegaciones del demandante establecen la responsabilidad del demandado de pleno derecho». Ciudad de Nueva York contra Mickalis Pawn Shop. LLC, 645 F.3d 114, 137 (2.º Cir. 2011) (se omiten las comillas y los corchetes).

La JCE es una agencia o entidad de la República Dominicana, cuyo propósito principal es organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones, y es un organismo establecido por la Constitución de la República Dominicana. (Comp. ¶¶ 2-4) Alrededor del 30 de octubre de 2023, las partes firmaron un acuerdo por el cual Latin Events prestaría ciertos servicios en relación con una campaña de registro de votantes de la JCE dirigida a residentes de Nueva York y estados vecinos (Comp. ¶¶ 12-15). Esto incluyó la producción de un evento de béisbol de tres días en el Citi Field, el suministro de 20,000 almuerzos en cuatro restaurantes de Nueva York y Nueva Jersey, y la organización de publicidad en radio, televisión e internet. (Comp. ¶¶ 12-15). Más específicamente, JCE acordó pagar a Latin Events \$600,000 por 15,000 boletos impresos para los eventos de béisbol, \$200,000 por 20,000 almuerzos en restaurantes específicos por el precio de \$10 por almuerzo, y \$200,000 por "publicidad en radio y televisión en Nueva York en La Mega, Amor, Telemicro y publicidad web en línea..." (ECF 36-1.) JCE también acordó pagar "[t]odo los impuestos de venta, uso y similares..." (id).

Del total de \$1 que JCE acordó pagar a Latin Events, queda un saldo pendiente de \$838,000 (Compl. ¶ 16). Félix Cabrera, director de Latin Events, presentó una declaración jurada ante notario público (ECF 24). Afirma que Latin Events cumplió con todas sus obligaciones bajo sus acuerdos con JCE, pero que JCE solo realizó un pago parcial. (Dec. Cabrera, ¶¶ 7-8). Latin Events presentó una copia del Acuerdo de las partes y dos facturas escritas en español con membrete de Latin Events. (Véase ECF 36).

Como cuestión preliminar, el Tribunal concluye que tiene jurisdicción sobre la materia porque las reclamaciones de los demandantes se refieren únicamente a las actividades comerciales de JCE. Como agencia o dependencia de la República Dominicana, JCE goza de inmunidad ante los tribunales estadounidenses, a menos que se encuentre amparada por una excepción a la concesión general de inmunidad soberana. Véase, e.g., Carey v. Nat'l Oil Corp., 592 F.2d 673, 676 (2d Cir. 1979). La Ley de Inmunitades Soberanas Extranjeras de 1976 (FSIA) establece excepciones específicas. Id.: «En virtud de la Ley, un Estado



extranjero goza presuntamente de inmunidad ante la jurisdicción de los tribunales estadounidenses; a menos que se aplique una excepción específica, un tribunal federal carece de jurisdicción sobre la materia en una reclamación contra un estado extranjero». *Arabia Saudita v. Nelson*, 507 U.S. 349, 355 (1993).

La FSIA dispone que «[un] estado extranjero no será inmune a la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos ni de los Estados Unidos en ningún caso en que la acción se base en una actividad comercial realizada en los Estados Unidos por dicho estado...» (28 U.S.C. 1605(a)(2)). El estatuto define «actividad comercial» como «ya sea una conducta comercial habitual o una transacción o acto comercial particular. El carácter comercial de una actividad se determinará en función de la naturaleza de la conducta o de la transacción o acto particular, y no en función de su propósito». (28 U.S.C. 1603(d)).

Al aplicar la excepción de inmunidad, un tribunal debe identificar la conducta particular en la que se basa la reclamación del demandante, considerando aquellos elementos que, de probarse, darían derecho al demandante a una reparación y sopesando el fundamento de la demanda. OBB

Personenverkehr AG v. Sachs 577 U.S. 27, 33 (2015) (omitidas las comillas y los puntos suspensivos). «Cuando un gobierno extranjero actúa, no como regulador de un mercado, sino como un actor privado dentro del mismo, las acciones del soberano extranjero son 'comerciales' en el sentido de la FSIA». *Republic of Argentina v. Weltover, Inc.*, 504 U.S. 607, 614 (1992). «La cuestión no es si el gobierno extranjero actúa con ánimo de lucro o, en cambio, con el fin de cumplir objetivos exclusivamente soberanos. Más bien, la cuestión radica en si las acciones particulares que realiza el Estado extranjero (independientemente del motivo subyacente) constituyen acciones mediante las cuales una parte privada participa en el comercio y el tráfico. (Se omiten las comillas; énfasis en el original). «Un contrato para comprar botas militares o incluso balas es una actividad 'comercial', porque las empresas privadas pueden utilizar de manera similar contratos de compraventa para adquirir bienes». *Id.*, págs. 614-15.

El Tribunal concluye que la excepción de inmunidad del artículo 1605(a)(2) se aplica a las reclamaciones de Latin Events contra JCE. JCE celebró un contrato con Latin Events para servicios relacionados con un evento de béisbol de tres días con entrada, que se celebró el 15 de mayo de 2015.



20.000 almuerzos y una campaña publicitaria en los medios. La "transacción o acto particular" en cuestión tenía un "carácter comercial", 28 U.S.C. 1603(d), y JCE realizó "el tipo de acciones mediante las cuales un particular participa en el comercio y el tráfico", República Argentina, 504 U.S., pág. 614. El hecho de que el propósito final de JCE estuviera relacionado con una campaña de registro de votantes —un propósito que podría entenderse como que implica "objetivos exclusivamente soberanos"— no altera el carácter comercial de sus actividades. Véase *ibíd.* Por lo tanto, la Corte concluye que JCE está exenta de inmunidad soberana en este caso y que la Corte tiene jurisdicción sobre la materia. 28 U.S.C. 1605(a)(2); Arabia Saudita, 507 U.S., pág. 355.

El Tribunal concluye que Latin Events ha establecido adecuadamente la responsabilidad de JCE en su demanda por incumplimiento de contrato. Véase *Mickalis* 645 F.3d, pág. 137. Específicamente, presentó un documento fechado el 30 de octubre de 2023, titulado "Recibo de Entradas", firmado por Yinet Núñez, quien ocupa el cargo de "Encargada OSE Nueva York, JCE", en nombre de JCE (ECF 36-1). Certifica a Latin Events LLC que JCE acordó comprar 15.000 entradas de béisbol impresas a Latin Events por un precio total de 600.000 dólares; que JCE acordó comprar a Latin Events ciertos servicios adicionales, incluyendo almuerzos en cuatro restaurantes La Casa del Mofongo por un total de 200.000 dólares estadounidenses; y publicidad en radio y televisión por un total de 200.000 dólares estadounidenses. U) "El monto total a pagar a Latin Events por el Departamento de Hacienda del Gobierno de la República Dominicana, por autorización del actual Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en nombre de la JCE, es de US\$1.000.000, de los cuales US\$600.000 corresponden a la compra de las entradas de la JCE y US\$400.000 a los Servicios Adicionales. Todos los impuestos sobre las ventas, el uso y similares también serán pagados por la JCE."(id)

Latin Events, mediante la declaración jurada de Cabrera, afirma que cumplió con todas sus obligaciones en virtud del Acuerdo, pero que el Demandado no presentó, se negó o descuidó la presentación de dos facturas en español, una de las cuales refleja que, al 18 de junio de 2024, JCE adeudaba un saldo pendiente de \$770,000, más \$68,337.50 en concepto de impuesto sobre las ventas de Nueva York a una tasa del 8.875%. (ECF 36-2, -3).



Latin Events ha demostrado adecuadamente los elementos de su demanda por incumplimiento de contrato, que incluyen la existencia de un contrato, el cumplimiento de la parte demandante, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la parte demandada y la indemnización por daños y perjuicios. Sgg, p. ej., 34-06 73. LLC v. Seneca Ins. Co., 39 N.Y.3d 44 52 (2022). También ha establecido que se le adeuda una indemnización por daños y perjuicios por un monto liquidado de \$838,337.50.

Latin Events también tiene derecho a intereses previos al juicio, según la legislación de Nueva York, a una tasa del 9% anual, desde la presentación de esta demanda el 4 de abril de 2025 hasta la fecha, sgg CPLR 5004, e intereses posteriores al juicio según el título 28 del Código de los Estados Unidos, artículo 1961(a).

En la medida en que Latin Events solicita costas por un monto de \$405.00 (ECF 34), la solicitud se deniega. Latin Events no ha identificado sus costas ni ha aportado documentación que las respalde.

El Tribunal no necesita abordar las reclamaciones de los demandantes por enriquecimiento injusto e incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo, ya que se alegan de forma alternativa y duplican la reclamación por incumplimiento de contrato.

CONCLUSIÓN.

Se concede la solicitud de los demandantes de sentencia en rebeldía. Se ordena respetuosamente al Secretario dictar sentencia a favor del demandante por la cantidad principal de \$838,337.50, más intereses previos al juicio por un total de \$48,370.93. El demandado es responsable del pago de intereses posteriores al juicio según el Título 28 del Código de los Estados Unidos, artículo 19610.

Se ordena respetuosamente al Secretario dar por terminada la moción (ECF 23) y cerrar el caso.

ASÍ SE ORDENA.

P. Kevin C. BERRY
Juez de distrito de los Estados Unidos

Fechado: New York, New York, el 21 de noviembre del 2025



Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by **Milton Adair Tingling**
3. acting in the capacity of **County Clerk**
4. bears the seal/stamp of the **county of New York**

Certified

5. at New York City, New York
6. the 11th day of March 2026
7. by Deputy Secretary of State for Business and Licensing Services, State of New York
8. No. NYC-2841066
9. Seal/Stamp
10. Signature



Whitney A. Clark

Whitney A. Clark

Deputy Secretary of State for Business and Licensing Services

State of New York }
County of New York } ss:

No. 1165640

I, **Milton Adair Tingling**, Clerk of the County of New York, and Clerk of the Supreme Court in and for said county, the same being a court of record having a seal, **DO HEREBY CERTIFY THAT**

JUDY SETO

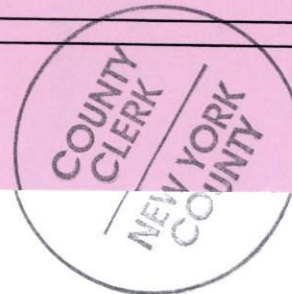
whose name is subscribed to the annexed original instrument has been commissioned and qualified as a NOTARY PUBLIC Deputy Clerk and has filed his/her original signature in this office and that he/she was at the time of taking such proof or acknowledgment or oath duly authorized by the laws of the State of New York to take the same: that he/she is well acquainted with the handwriting of such public officer or has compared the signature on the certificate of proof or acknowledgment or oath with the original signature filed in his/her office by such public officer and he/she believes that the signature on the original instrument is genuine.



IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and my official seal this
11th day of March, 2026

Milton Adair Tingling

County Clerk, New York County



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Country: United States of America
This public document

- 2. has been signed by Soraya Vasquez ----X
- 3. acting in the capacity of Deputy Clerk
- 4. bearing the seal/stamp of U.S. District Court

25-cv-2830 (PKC)

CERTIFIED

ORDER

- 5. at New York, N.Y. 6. the 6th March 2026
- 7. by Southern District of New York
- 8. No 26 APO 5665
- 9. Seal/Stamp

10. Signature:



-----X

CASTEL, U.S.D.J.

Plaintiff Latin Events LLC (“Latin Events”) moves for the entry of default judgment against defendant Junta Central Electoral De La Republica Dominicana (“JCE”) pursuant to Rule 55(b)(2), Fed. R. Civ. P., and Local Civil Rule 55.2.

Latin Events commenced this action when it filed a complaint on April 4, 2025. (ECF 1.) It has filed an affidavit of service reflecting that service was personally accepted on behalf of the defendant by Gladys “Doe” at defendant’s office at 1501 Broadway in Manhattan. (ECF 8.) JCE has not answered or appeared. The Clerk of Court issued a Certificate of Default against JCE on October 29, 2025. (ECF 32.)

Rule 55(a), Fed. R. Civ. P., provides that default may be entered where a party has failed to plead or “otherwise defend.” “[A] default is an admission of all well-pleaded allegations against the defaulting party.” D.H. Blair & Co. v. Gottdiener, 462 F.3d 95, 107 (2d Cir. 2006) (quotation marks omitted). But “a court’s decision to enter a default against defendants does not by definition entitle plaintiffs to an entry of a default judgment.”

Bricklayers & Allied Craftworkers Local 2, Albany, N.Y. Pension Fund v. Moulton Masonry &



UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

-----X
LATIN EVENTS LLC,

Plaintiff,

25-cv-2830 (PKC)

-against-

ORDER

JUNTA CENTRAL ELECTORAL DE LA
REPUBLICA DOMINICANA,

Defendants.
-----X

CASTEL, U.S.D.J.

Plaintiff Latin Events LLC (“Latin Events”) moves for the entry of default judgment against defendant Junta Central Electoral De La Republica Dominica (“JCE”) pursuant to Rule 55(b)(2), Fed. R. Civ. P., and Local Civil Rule 55.2.

Latin Events commenced this action when it filed a complaint on April 4, 2025. (ECF 1.) It has filed an affidavit of service reflecting that service was personally accepted on behalf of the defendant by Gladys “Doe” at defendant’s office at 1501 Broadway in Manhattan. (ECF 8.) JCE has not answered or appeared. The Clerk of Court issued a Certificate of Default against JCE on October 29, 2025. (ECF 32.)

Rule 55(a), Fed. R. Civ. P., provides that default may be entered where a party has failed to plead or “otherwise defend.” “[A] default is an admission of all well-pleaded allegations against the defaulting party.” D.H. Blair & Co. v. Gottdiener, 462 F.3d 95, 107 (2d Cir. 2006) (quotation marks omitted). But “a court’s decision to enter a default against defendants does not by definition entitle plaintiffs to an entry of a default judgment.”

Bricklayers & Allied Craftworkers Local 2, Albany, N.Y. Pension Fund v. Moulton Masonry &



Construction, LLC, 779 F.3d 182, 187 (2d Cir. 2015). “[P]rior to entering default judgment, a district court is required to determine whether the plaintiff’s allegations establish the defendant’s liability as a matter of law.” City of New York v. Mickalis Pawn Shop, LLC, 645 F.3d 114, 137 (2d Cir. 2011) (quotation marks and brackets omitted).

JCE is “an agency or instrumentality of the Dominican Republic,” whose main purpose is to organize and direct electoral assemblies for holding elections, and is a body mandated by the Dominican Republic’s constitution. (Compl’t ¶¶ 2-4.) On or about October 30, 2023, the parties entered into an agreement wherein Latin Events was to provide certain services in connection with a JCE voter-registration drive directed to residents of New York and neighboring states. (Compl’t ¶¶ 12-15.) This included the production of a three-day baseball event at Citi Field, providing 20,000 lunch meals at four restaurants in New York and New Jersey, and arranging radio, television and internet publicity. (Compl’t ¶¶ 12-15.) More specifically, JCE agreed to pay Latin Events \$600,000 for 15,000 printed tickets to the baseball events, \$200,000 for 20,000 lunch meals at specified restaurants for the price of \$10 per lunch, and \$200,000 for “radio and television publicity in New York on La Mega, Amor, Telemicro and online web publicity” (ECF 36-1.) JCE also agreed to pay “[a]ll sales, use and similar taxes” (Id.)

Of the total \$1,000,000 that JCE agreed to pay Latin Events, an outstanding balance of \$838,000 remains. (Compl’t ¶ 16.) Felix Cabrera, a principal of Latin Events, has submitted an affidavit sworn before a notary public. (ECF 24.) He states that Latin Events complied with all obligations under its agreements with JCE, but that JCE has made only partial payment. (Cabrera Dec. ¶¶ 7-8.) Latin Events has submitted a copy of the parties’ agreement and two invoices written in the Spanish language under a Latin Events letterhead. (See ECF 36.)

The latter invoice, dated June 18, 2024, reflects that JCE fully paid \$200,000 owed for Latin Events's media-publicity services and \$30,000 for the restaurant meals, leaving an outstanding principal amount of \$770,000, plus an additional \$68,337.50 in New York sales tax at the rate of 8.875%. (See *id.*) The Complaint brings claims for breach of contract, unjust enrichment and breach of the implied covenant of good faith and fair dealing. (Compl't ¶¶ 23-38.)

As a threshold issue, the Court concludes that it has subject matter jurisdiction because plaintiff's claims are solely directed to JCE's commercial activities. As an agency or instrumentality of the Dominican Republic, JCE is immune from suit in the United States courts unless it falls within an exception to the general grant of sovereign immunity. See, e.g., *Carey v. Nat'l Oil Corp.*, 592 F.2d 673, 676 (2d Cir. 1979). Specific exceptions are set forth in the Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 ("FSIA"). *Id.* "Under the Act, a foreign state is presumptively immune from the jurisdiction of United States courts; unless a specified exception applies, a federal court lacks subject-matter jurisdiction over a claim against a foreign state." *Saudi Arabia v. Nelson*, 507 U.S. 349, 355 (1993).

The FSIA provides that "[a] foreign state shall not be immune from the jurisdiction of courts of the United States or of the States in any case -- in which the action is based upon a commercial activity carried on in the United States by the foreign state" 28 U.S.C. § 1605(a)(2). The statute defines a "commercial activity" as "either a regular course of commercial conduct or a particular commercial transaction or act. The commercial character of an activity shall be determined by reference to the nature of the course of conduct or particular transaction or act, rather than by reference to its purpose." 28 U.S.C. § 1603(d).

In applying the immunity exception of 1605(a)(2), a court must identify the particular conduct that the plaintiff's claim is "based upon," considering "those elements that, if

proven, would entitle a plaintiff to relief” and weighing the “gravamen of the complaint.” OBB Personenverkehr AG v. Sachs, 577 U.S. 27, 33 (2015) (quotation marks and ellipsis omitted).

“[W]hen a foreign government acts, not as regulator of a market, but in the manner of a private player within it, the foreign sovereign’s actions are ‘commercial’ within the meaning of the FSIA.” Republic of Argentina v. Weltover, Inc., 504 U.S. 607, 614 (1992). “[T]he question is not whether the foreign government is acting with a profit motive or instead with the aim of fulfilling uniquely sovereign objectives. Rather, the issue is whether the particular actions that the foreign state performs (whatever the motive behind them) are the type of actions by which a private party engages in trade and traffic or commerce.” Id. (quotation marks omitted; emphasis in original). “[A] contract to buy army boots or even bullets is a ‘commercial’ activity, because private companies can similarly use sales contracts to acquire goods.” Id. at 614-15.

The Court concludes that the immunity exception of section 1605(a)(2) applies to the claims of Latin Events against JCE. JCE entered into a contract with Latin Events for services related to a ticketed three-day baseball event, serving 20,000 lunch meals and a media-publicity campaign. The “particular transaction or act” at issue had a “commercial character,” 28 U.S.C. § 1603(d), and JCE engaged in “the type of actions by which a private party engages in trade and traffic or commerce,” Republic of Argentina, 504 U.S. at 614. That JCE’s ultimate purpose related to a voter-registration drive – a purpose that could be understood to implicate “uniquely sovereign objectives” – does not alter the commercial character of its activities. See id. The Court therefore concludes that JCE is exempt from sovereign immunity in this case and that the Court has subject matter jurisdiction. 28 U.S.C. § 1605(a)(2); Saudi Arabia, 507 U.S. at 355.

The Court concludes that Latin Events has adequately established JCE's liability as a matter of law on its breach of contract claim. See Mickalis, 645 F.3d at 137. Specifically, it has submitted a document dated October 30, 2023 that is captioned "Receipt of Tickets" and executed by Yinet Nunez, who has the job title "Encargada OSE New York, JCE," on behalf of JCE. (ECF 36-1.) It "certifies to Latin Events LLC" that "JCE has agreed to purchase" 15,000 printed baseball tickets from Latin Events for a total purchase price of \$600,000; that JCE "has agreed to purchase from Latin Events" certain additional services, including lunch meals at four La Casa del Mofongo restaurants "for a total of US\$200,000"; and "radio and television publicity . . . for a total of US\$200,000." (Id.) "The total amount payable to Latin Events by the Treasury Department of the Government of the Dominican Republic, by authority of the actual President of the Dominican Republic, Luis Abinader, on behalf of JCE, is US\$1,000,000, US\$600,000 for the purchase of the JCE Tickets and US\$400,000 for the Additional Services. All sales, use and similar taxes shall also be payable by JCE." (Id.)

Latin Events, through the affidavit of Cabrera, states that it "complied with all of its obligations under the Agreement" but that "Defendant failed, refused, or otherwise neglected to pay the full amount due under the terms of the Agreement." (Cabrera Dec. ¶¶ 7-8.) It has submitted two invoices in the Spanish language, one of which reflects that as of June 18, 2024, JCE owed an outstanding balance of \$770,000, plus \$68,337.50 in New York sales tax at the rate of 8.875%. (ECF 36-2, -3.)

Latin Events has adequately established the elements of its breach of contract claim, which include the existence of a contract, plaintiff's performance, defendant's breach of contractual obligations, and damages. See, e.g., 34-06 73, LLC v. Seneca Ins. Co., 39 N.Y.3d

44, 52 (2022). It also has established that it is owed damages in the liquidated amount of \$838,337.50.

Latin Events is also entitled to pre-judgment interest under New York law at the rate of 9% per annum, running from the April 4, 2025 filing of this action through present, see CPLR 5004, and post-judgment interest under 28 U.S.C. § 1961(a).

To the extent that Latin Events seeks costs in the amount of \$405.00 (ECF 34), the application is denied. Latin Events has not identified its costs or provided any supporting documentation thereto.

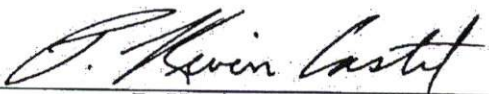
The Court need not address plaintiff's claims of unjust enrichment and breach of the implied covenant of good faith and fair dealing, as they are pleaded in the alternative and duplicative of the breach of contract claim.

CONCLUSION.

Plaintiff's motion for default judgment is GRANTED. The Clerk is respectfully directed to enter judgment for plaintiff in the principal amount of \$838,337.50, plus prejudgment interest totaling \$48,370.93. Defendant is liable for post-judgment interest under 28 U.S.C. § 1961(a).

The Clerk is respectfully directed to terminate the motion (ECF 23) and to close the case.

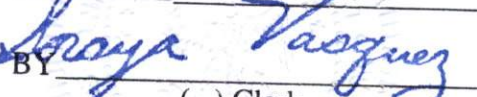
SO ORDERED.


P. Kevin Castel
United States District Judge

CERTIFIED AS A TRUE COPY ON

MAR 06 2026

THIS DATE

BY 

() Clerk
(X) Deputy

Dated: New York, New York
November 21, 2025